

PATRICIA ALVARENGA VENUTOLO. DE VECINOS A CIUDADANOS. MOVIMIENTOS COMUNALES Y LUCHAS CÍVICAS EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE COSTA RICA¹

José Manuel Cerdas Albertazzi

Aunque el tema de la historia de los movimientos sociales no había desaparecido del todo, ciertamente ha estado bastante abandonado en la historiografía nacional desde hace unos diez o doce años. Entre finales de la década de 1970 y hasta inicios de la de 1990, esta fue una de las áreas de desarrollo de la nueva historiografía que, con la historia económica y demográfica, se fue abriendo campo. Los contextos nacional y centroamericano e iberoamericano favorecían y motivaban, en un estado de efervescencia social y política, el estudio de movimientos obreros, campesinos y sindicales.

Por entonces, la mayoría de estudios giraban, tanto desde una perspectiva descriptiva como de otra más interpretativa, en torno a organizaciones sindicales y políticas, utilizando como base de información la prensa escrita y la documentación escrita, pero más escasamente la fuente oral (en buena parte, esto último fue así porque los períodos estudiados se ubicaban entre fines del siglo XIX y la década de 1940, pero también porque en los primeros estudios metodológicamente se prescindía de la fuente oral). Esa producción historiográfica también fue acometida por parte de otros científicos sociales, particularmente por sociólogos que estudiaban movimientos sociales más recientes y coetáneos.

Al avanzar en los años de la década de 1990, la historiografía nacional dejó relativamente abandonado el campo de la historia de los movimientos sociales y el de la historia de los trabajadores. Un campo tan vasto parece haberse visto afectado en su estudio por el momento de repliegue de los movimientos sociales en el país y el área centroamericana, por el fin de la Guerra Fría, junto a la “crisis de los paradigmas” y el profundo reflujo de la izquierda costarricense.²

Es por ello que resulta de gran valor el que Alvarenga haya regresado sobre la temática, pero que además lo haya hecho mediante enfoques metodológicos renovados y desde la perspectiva de los movimientos comunales, cuyo estudio había sido marginado por la producción historiográfica nacional, aunque sí lo estudiaron en su momento desde otras ciencias sociales. Los estudios históricos de los sindicatos, los partidos, la conflictividad huelguística y las organizaciones obreras en general, no fueron acompañados en ese entonces por el desarrollo de una historia de las luchas comunales. La obra en cuestión ganó merecidamente el Premio Nacional de Historia de Costa Rica, de 1995.

En cuanto a las partes del libro, se nos ofrece una interesante y sugerente discusión teórico-metodológica en la Introducción. Se repasan conceptos como “ciudadanía”, “identidad común” en la política y “pueblo”; se problematiza el uso de este último término, así como el de las relaciones entre el Estado benefactor y las organizaciones comunales; se interroga sobre los efectos que tuvo esa relación con respecto del movimiento comunal autónomo y por lo tanto con la posibilidad de que se conformara una ciudadanía participativa. Seguidamente se expone el tipo de fuentes utilizada y su tratamiento. En este último aspecto la autora menciona que, además del uso de periódicos y revistas, se elaboraron doce entrevistas, las cuales permitieron contrapuntar entre eventos ocurridos y la narrativa de los informantes. En tal sentido, hay un notable esfuerzo por darle voz a líderes de base, lo que tradicionalmente poco se realiza.

Los capítulos subsiguientes del libro recorren una serie de movimientos y de luchas que llevan el propósito de “poder establecer patrones comunes, diferenciaciones y líneas de evolución desde la óptica de los participantes en el conflicto”. Es así como el capítulo uno se enfila al estudio de los movimientos comunales organizados en torno a las denominadas Juntas Progresistas y las organizaciones que surgieron en la década de 1960 impulsadas por el estado, las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Las últimas habrían de competir con las primeras, las cuales se caracterizaban por su autonomía de la esfera oficial y su vinculación, en muchas de ellas, al Partido Vanguardia Popular (PVP), el partido de los comunistas costarricenses. Esta parte del estudio va de 1950 a 1990. Se analizan los aspectos más generales de todo el trabajo en lo que tiene que ver con el concepto de ciudadanía y las relaciones de esas organizaciones con un estado interesado en cooptar y debilitar su autonomía y que en el largo plazo parece lograr su cometido. Este capítulo complementa el trabajo pionero realizado por Jorge Cayetano Mora (1991) sobre las Juntas Progresistas y el papel jugado por la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), entidad oficial encargada de impulsar la Asociaciones de Desarrollo Comunal. Se realiza una caracterización del tipo de movimiento, de liderazgo, de prácticas de lucha, de las relaciones con el estado, de los resultados de corto y largo plazo de las luchas y de la capacidad de autonomía para una cultura política alternativa, que se desmarque del clientelismo y la cooptación.

El capítulo segundo aborda el tema de la mujer y el proceso de constitución de la ciudadanía femenina examinando el caso de la Alianza de Mujeres Costarricenses (AMC), órgano adscrito a Vanguardia Popular, entre 1952, fecha de su fundación, a 1983, año previo a la división del PVP, aunque no a la desaparición total de la AMC. Alvarenga la caracteriza como una organización que, en una época donde apenas las mujeres estaban ensayando su ciudadanía – al menos en lo que se refiere al derecho al voto (que se dio por vez primera en las elecciones de 1953) –, trató de organizar a las “esposas y madres de los trabajadores” para que se desarrollaran como ciudadanas en un sentido más integral que al de ir a votar en cada elección. La autora llama la atención al hecho de que la AMC haya sido ignorada entre las estudiosas de la historia de la mujer, entre otras cosas, porque no tuvieron las características que llegarían a tener las organizaciones de mujeres que surgirían en las décadas de 1980 y 1990, fundamentalmente concientes del sistema patriarcal, mientras que la AMC lo que se propuso fue la movilización de mujeres de hogares populares y pobres, las que vivían de espaldas a la política y la lucha comunal. Su acción estaba dirigida a forjar ciudadanas, principalmente madres y esposas, que alcanzarían

su emancipación con el resto de la clase trabajadora. Básicamente plantearon luchas por mejorar sus condiciones de vida mediante la demanda de mayores y mejores servicios públicos en el ámbito comunal y en beneficio de las familias trabajadoras. La autora percibe este caso, como portadora de una concepción de emancipación femenina mediante transformaciones socioeconómicas y el triunfo del socialismo; idea compartida entonces por toda la izquierda marxista.

En el capítulo tercero se retorna al movimiento de Juntas Progresistas, pero con un enfoque hacia las luchas que demandaban mejoras en los servicios públicos. Se conciben a los participantes de estos movimientos como ciudadanos que, en tanto consumidores, se sienten insatisfechos por los servicios que reciben. Las demandas para mejorar tales servicios fueron variadas, dependiendo del servicio y la entidad encargada de suministrarlo. La autora destaca el hecho de que, mediante esta conflictividad detectada, se puede afirmar que la implantación del estado modernizador y benefactor no se dio con ausencia total de conflictos, a diferencia de como tradicionalmente se ha pensado. El crecimiento urbano, la explosión demográfica y la expansión de los servicios provocaron tensiones que fueron canalizadas “desde abajo” por las Juntas Progresistas, las cuales, aunque mantenían vínculos estrechos con el PVP, lograron desarrollar dinámicas ciudadanas policlasistas, aunque su base social principal fue trabajadora y pobre, más que de capas medias, neutralizadas éstas últimas por el discurso anticomunista de Guerra Fría. La autora introduce, de manera sugerente, la noción de “estafa” como percepción del pueblo o la ciudadanía cuando considera que la estructura administrativa o política no atiende sus expectativas y demandas, lo cual provoca desconfianza hacia entidades – públicas o privadas – y autoridades. La utilidad de este concepto es crucial para comprender las motivaciones de los ciudadanos-consumidores. Además, se repasan formas de protesta y de organización, así como su evolución (reuniones, boletines, visitas casa por casa, mítines, alocuciones, marchas, huelga de pagos, apagones, bloqueos), la represión, así como la cuestión local-regional-nacional en las luchas.

El capítulo cuarto se refiere a un caso de lucha regional levantada por habitantes de la ciudad de Cartago y localidades cercanas que desembocó en una huelga de pagos contra el servicio eléctrico, en 1962. La autora demuestra que el movimiento tuvo características regionales, intergeneracionales e interclasistas. Su dirigencia estaba constituida por elementos connotados de la clase media y alta de la ciudad, que hasta desestimó el apoyo de Juntas Progresistas de otras zonas del país. Pese a ello, la represión fue inusitada para los patrones de conflictividad costarricense, y en medio de la Guerra Fría los medios y el gobierno recurrieron al cliché de que había comunistas infiltrados en el movimiento, cosa totalmente desmentida por los dirigentes del movimiento y comprobada como falsa. La opinión pública nacional se impactó con la represión ejercida, pero a la larga la lucha surtió efectos positivos. La autora analiza el hecho de por qué esta lucha ha quedado en el olvido de la memoria de la sociedad cartaginesa, pese a lo importante que fue en su momento.

El quinto capítulo trata sobre la gran lucha cívica contra el alza de las tarifas eléctricas en el área metropolitana de San José, en 1983, donde el núcleo principal fueron los barrios populares del sur de la capital. La autora contextualiza los acontecimientos en el marco del fin del modelo desarrollista y de la expansión económica, la crisis económica

de principios de los años ochenta, y el inicio de la puesta en práctica de los ajustes estructurales (apertura económica, reducción del estado en materia económica y social, etc.): la población estaba percibiendo un alto costo de la vida y una reducción en el gasto social. El movimiento, si bien fue amplio y heterogéneo por ser un movimiento de consumidores, en Hatillo mantuvo rasgos más clasistas y esa fue la zona que hegemonizó el movimiento. La magnitud y complejidad del movimiento son finamente analizados por la autora mediante la revisión de los actores, las acciones y reacciones, las consignas y la prensa, la simbología del movimiento, los métodos de lucha (en particular los bloqueos), entre otros. Se pasa revista a las acciones gubernamentales y al resultado de mediano plazo para el movimiento comunal.

La última lucha que es estudiada, es la de la protesta cívica contra el denominado *combo del ICE*, en el año 2000, grupo de leyes que se llevó para su aprobación a la Asamblea Legislativa y que tenía como propósito declarado la privatización parcial de los servicios eléctricos que presta el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y como propósito encubierto, el que de esta manera se beneficiasen directamente miembros connotados de la clase política. En un contexto histórico muy diferente al de los otros casos estudiados, la autora intenta encontrar cuánto hay de nuevo y cuánto de tradición en esta lucha en que el Estado ha cambiado, los movimientos sociales también (surgimiento de “nuevos movimientos” como ecologistas, feministas y productores agropecuarios) y, a la vez, ha ido aumentando el desprestigio de los políticos y del bipartidismo (pérdida de legitimidad del régimen). De nuevo la autora incorpora en su análisis del movimiento aspectos simbólicos (el ICE como símbolo de la nación), composición social, los actores sociales, las alianzas, el novedoso ingrediente espontáneo y la estrategia de lucha. De igual manera, se revisa el final del movimiento y las actitudes del gobierno, aunque algo someramente. La autora termina este capítulo con interrogantes y conclusiones: ¿hay un relevo generacional en la protesta?, ¿se mantiene alguna tradición de lucha?

En el balance general que hace, la autora señala que, luego de obtener sus demandas o parte importante de ellas, la ciudadanía en Costa Rica no produce un proceso de acumulación en la cultura política y organizativa, más bien las expectativas generadas en los momentos de auge se disuelven o disipan y tienen las características de ser luchas defensivas de consumidores. Pese a ello, encuentra que sí quedan rastros de esa cultura política, tal como se demuestra a lo largo del estudio.

El otro hallazgo, que ya fue señalado, es la evidencia de que la expansión del “Estado moderno” (diríamos “interventor y benefactor”) no se dio sin contradicciones – tal como pareciera evidenciar mucha de la literatura que estudia el fenómeno y el período – y que las luchas y resistencias exhiben más bien una ciudadanía que no fue unidimensional ante el Estado y los poderes económicos durante el proceso, la que se configura en cada lucha y situación concreta.

Estamos ante un estudio realmente importante, tanto desde el punto de vista historiográfico como desde el punto de vista de su relevancia social. Por un lado, se vuelve a poner en la agenda de investigación de la disciplina la algo olvidada historia de los movimientos y luchas sociales desde una óptica con renovaciones teórico-metodológicas. Por otro lado, se estudia un fenómeno histórico en momentos en que la sociedad costarricense experimenta una serie de tensiones sociales y políticas, luego de más de veinte años de

pausados pero decisivos cambios neoliberales en la economía y el Estado y cuando dicho proceso está a punto de ser profundizado o redireccionado. Ante esto, la opinión pública se encuentra dividida, pero importantes sectores organizados de la ciudadanía se oponen al aperturismo sin contrapesos redistributivos y sin profundizaciones del régimen democrático y participativo. Por lo tanto, es importante conocer cómo en el pasado reciente la ciudadanía costarricense luchó contra los poderes estatales o del capital, cuando éstos han intentado imponer de manera aplastante sus condiciones, tal como nos lo dice la autora, y cómo respondió el Estado costarricense.

Notas

- 1 Patricia Alvarenga Venutolo, *De vecinos a ciudadanos. Movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica*. San José-Heredia, (Editorial de la Universidad de Costa Rica-Editorial de la Universidad Nacional, 2005)
- 2 Esta cuestión ha sido revisada por V. H Acuña, C. Hernández y J. M. Cerdas en *Revista de Historia*, No. Especial, (1996); y por P. Alvarenga y C. Hernández en: I. Jiménez, F. Enríquez, y J.M. Cerdas, (eds.) *Entre dos siglos: la investigación histórica costarricense 1992-2002* (Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Alajuela, 2003); así como por Alvarenga en la Introducción de la obra que comentamos.